

¡MÁQUINAS DE LA MUERTE!

Mayo 1, 2015

Por: Edilson Romaña

Integrante de sub-comisión técnica de las FARC-EP

El paramilitarismo en Colombia no nació por generación espontánea sino que ha sido una política oficial. Siempre se ha querido hacer una división entre los crímenes de Estado - denominados con el eufemismo de “ejecuciones extrajudiciales”- y los ejecutados por grupos paramilitares, pero ambos responden a una misma estrategia del régimen.

Esta política fue inaugurada muchas décadas atrás, desde antes de los Gobiernos del Frente Nacional. En el llamado período de La Violencia ya existían en nuestro país escuadrones de la muerte, los más reconocidos eran “los chulavitas”, denominación tomada del nombre de un municipio boyacense, donde la policía mataba, torturaba y descuartizaba a liberales y comunistas.

De este municipio fueron reclutados muchos jóvenes para extender al resto del país las acciones criminales sin fórmula de juicio contra los opositores a los gobiernos conservadores de ese entonces. Luego del pacto del Frente Nacional, los gobiernos de los dos partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, continuaron asesinando selectivamente a sindicalistas, representantes de la Iglesia, congresistas, candidatos a la Presidencia, dirigentes agrarios, etc.

Todo ha sido una concepción de Estado basada en la Teoría de la Seguridad Nacional, con plena complacencia de la oligarquía colombiana y orientada por la Casa Blanca. Las Fuerzas Armadas fueron permeadas desde que empezaron a ser instruidas en las escuelas del exterior; las primeras misiones extranjeras fueron la de Chile, luego la francesa y después la Escuela de las Américas de los Estados Unidos.

La Teoría de la Seguridad Nacional se fundamenta en los conceptos de “enemigo interno” y de “quien no está conmigo es mi enemigo”; infunde el odio entre el mismo pueblo implementando la guerra entre hermanos mientras quienes se benefician de la carnicería son los Estados Unidos, políticos tradicionales, grandes comerciantes, industriales y ganaderos, y empresas multinacionales.

En los años 80 se recrudeció la práctica de asesinar, desaparecer, torturar y masacrar grupos de población enteros. Con la participación del mercenario israelí Jair Klein como instructor, prepararon numerosas pandillas de exterminio que se enfilaron a acabar con los nuevos movimientos políticos surgidos de acuerdos de paz entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno de Belisario Betancourt, el principal de ellos fue la UNIÓN PATRIÓTICA.

Luego, esas máquinas de guerra fueron perfeccionadas, les dotaron motosierras para descuartizar a opositores, asesinando a decenas de miles de compatriotas a quienes

también despojaron de sus propiedades, para la lo cual han contado con la protección y apoyo del Ejército y la Policía. Así lo demuestran algunos de los procesos judiciales, los testimonios de militares presos y más de seis millones de desplazados.

El más reciente capítulo de esta deplorable política lo constituyen los mal llamados “falsos positivos”- que en verdad son crímenes de Estado- ejecutados directamente por integrantes del Ejército Nacional. Es muy dicente que, ante el escándalo nacional e internacional, en el año 2008 el Gobierno se vio obligado a desarticular la Brigada Móvil número 15, la más involucrada en estos asesinatos.

Hay que tener en cuenta que la Fuerza Pública ha sido solo ejecutora de la mencionada política. Es necesario estudiar el fenómeno del paramilitarismo, establecer cómo se conformó, cómo funcionó, en qué lugares fue establecido, con qué dinero, quiénes lo auparon y estimularon y por qué sigue actuando.

En el presente año han aumentado los crímenes en el país. Las estadísticas oficiales demuestran que en solo Bogotá el aumento fue del 123%. Pero lo más grave es que no hay ni un solo responsable tras las rejas, mientras el pobre que se apropió de una pastilla de caldo Maggi, purga una larga condena en las mazmorras del régimen.

Si se invierten billones de recursos en la Policía para la seguridad ciudadana, ¿qué sentido tiene seguir favoreciendo la seguridad privada y el armamentismo y esas corruptelas en torno a los armerillos y al mercado de las armas? En eso el Estado colombiano no se puede equivocar, no puede estar armando a los civiles e incluso permitiéndoles a ganaderos, comerciantes, esmeralderos, empresas privadas, gremios económicos y a políticos que actúen a su antojo para que terminen conformando verdaderos ejércitos paramilitares.

El país debe analizar lo ocurrido en los procesos en que las guerrillas se han vinculado a la vida civil, desde Guadalupe Salcedo hasta Carlos Pizarro, que los han liquidado después de haber dejado las armas. El Estado es quien tiene que asumir el desarme total de los grupos paramilitares –llamados ahora Bacrim-. Sin ello no habrá paz con justicia social.